**CONFIDENCIAL**

**Fecha y hora: 28 Agosto 1984, 16:50**

**De: Embajada U.S. Lima**

**Para: Secretario de Estado, Washington D.C.; Embajadas U.S. Bogotá, Caracas, La Paz, Panamá, Quito; Agencia de Inteligencia de Defensa (DIA), Washington D.C.; Comandante en Jefe del Comando Sur, QuarryHeights, Panamá**

**Asunto: Tumba masiva descubierta en zona de emergencia[[1]](#footnote-2)**

1. [Censurado] …Texto completo.
2. Los periódicos de Lima publicaron el 24 de agosto informes concernientes al hallazgo, a 36 kilómetros de la ciudad de Huanta, en la zona de emergencia (EZ), de numerosos cadáveres en muchas tumbas “clandestinas”. Aunque las estimaciones iniciales varían (“La República” puso como encabezado el descubrimiento de 89 cuerpos) la estimación más confiable parece ser 50: 49 varones y una mujer. Todos fueron encontrados en 3 tumbas en… [falta una página].
3. [Continúa] …respondido el mismo día por un comunicado que declaraba: “Es de público conocimiento que los delincuentes terroristas siguen la práctica de esconder sus muertos –producto de enfrentamientos con las fuerzas de seguridad- para evitar su identificación y asociación con sus cómplices infiltrados al interior de las comunidades. El lugar en el que se encontraron las tumbas está localizado cerca de Luricocha, Huamanguilla y Huanta, en cuyas localidades han tenido lugar diferentes encuentros entre terroristas (y fuerzas de seguridad). Esto lleva a suponer que los senderistas (fueran quienes fuesen) enterraron sus muerto allí. Las fuerzas de seguridad, respecto al entierro tanto de civiles como de militares (fallecidos), proceden de acuerdo con los requerimientos legales existentes y (lo hacen) públicamente. Por su parte, el presidente Belaúnde descartó la posibilidad de que las fuerzas de seguridad pudieran estar involucradas en asesinatos, calificando dichas acusaciones como “especulaciones políticamente motivadas”.
4. No obstante las declaraciones del presidente y del alto mando militar, muchos observadores locales atribuyen la responsabilidad de las muertes a las fuerzas de seguridad, asociando a los cadáveres (todavía no identificados) con informes recibidos previamente sobre personas “desaparecidas”. Contrariamente a sucesos anteriores en los cuales surgieron cargos similares, las acusaciones de involucramiento contra las fuerzas de seguridad emanan no sólo de la prensa de oposición (por ejemplo, el marxista “El Diario” y “La República”), sino también de publicaciones claramente identificables como pro-régimen (por ejemplo, el semanario “Caretas” y el diario “Expreso”). El único punto importante de discrepancia en este grupo de publicaciones se relaciona con la probable fecha de las muertes. “La República”, “El Diario” y “Expreso” hablan de un solo evento, mientras que “Caretas” (en su edición del 27 de agosto) se refiere a entierros múltiples, espaciados por períodos de varios días.
5. Todos los recuentos están de acuerdo en que las víctimas eran jóvenes (entre los 17 y 40 años), fueron desfiguradas para evitar su identificación y metódicamente asesinados. Algunos fueron estrangulados, otros acuchillados, otros disparados en la cabeza o el pecho. Muchos tenían los ojos vendados y los brazos atados. Todos estaban desnudos, con evidencias de que la ropa que usaban fue quemada cerca de las tumbas comunes. “Caretas” informa del hallazgo en el sitio de una libreta militar perteneciente a un desaparecido, cuyo arresto e internamiento en el campamento de la Marina en Huanta fue reportado el 15 de agosto.
6. Aunque la reacción pública parece ser de horror unánime, aparecen diferencias importantes. El editorial de “Caretas” del 27 de agosto pregunta por qué el Perú de 1984 debe escoger “la solución argentina de 1975”. Los columnistas de “Expreso” Manuel D’Ornellas y Luis Loli Roca, ambos escribiendo el 25 de agosto, postulan que incluso la guerra tiene reglas humanitarias, y que “capturar, torturar, mutilar y encubrir es la diferencia entre (el imperio de la) ley y la caverna”. Sin embargo, para el semanario “Oiga” estas “aparentes ejecuciones extrajudiciales” son parte del paquete relacionado con la guerra (“¿Habrá alguna vez algo parecido a una guerra limpia?”).
7. Comentario: Los asesinatos de Pucayacu añaden más combustible al debate de derechos humanos iniciado por las desapariciones de Oropeza/Ayala y los informes de medidas “duras” adoptadas por las fuerzas de seguridad en la zona de emergencia (REFTEL). Es muy temprano para establecer con certeza a donde llevará esta discusión. Nosotros notamos, por ejemplo, (como lo hizo “Expreso” el 25 de agosto) que las víctimas de Pucayacu murieron muy recientemente, es decir, después que se iniciara la controversia sobre las violaciones de derechos humanos de Oropeza/Ayala. El Fiscal de la Nación viajó inmediatamente a Huanta, y realizó una investigación inicial. Él informó que se reunió por dos horas con el presidente Belaúnde. Mientras que la prensa y los medios han adoptado posiciones, otras instituciones que forman parte del sistema democrático todavía no entran en la refriega. El ministro del Interior, Pércovich, está listo para otra presentación ante el Congreso, y la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados espera recibirlo. JORDAN.

1. Traducción de Ricardo Alvarado Portalino. Las notas entre corchetes pertenecen al traductor. [↑](#footnote-ref-2)